

# SUFRAGIO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD


## DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11249-06

REFERENCIA	Modifica la ley N° 18.556 y el Código Procesal Penal, para garantizar el derecho a sufragio de las persona privadas de libertad que se encuentren habilitadas para sufragar
INICIATIVA	Moción de los diputados Sra. Fernández y Sres. Melo, Poblete y Saldívar
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIOS	De Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización
INGRESO	31 de mayo de 2017
ARTICULADO	Dos artículos

## OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

La preocupación de los autores de la moción es válida, pues se refiere a los electores que, estando habilitados para sufragar en una elección popular o plebiscito, no pueden hacerlo por estar privados de libertad, como por ejemplo, el caso de una persona acusada judicialmente por delito que no merezca pena aflictiva, pero que se encuentre con una medida cautelar de prisión.

No obstante la validez de la moción desde este punto de vista, la solución que se viene proponiendo es inadecuada, toda vez que no existe impedimento legal alguno para que esas personas puedan votar; el problema detectado es esencialmente del orden administrativo y no requiere de modificaciones legales.

En gran medida, la moción confunde el registro electoral, que es permanente, con el padrón electoral, que se confecciona para cada elección; y se pretende modificar la normativa relativa al registro, lo que no conduce a la solución deseada; ésta solo provendrá de medidas de carácter administrativo que exceden el ámbito legal 

## CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Se proponen medidas para que las personas privadas de libertad, pero cuya ciudadanía no se encontrare suspendida ni revocada, puedan ejercer el derecho de sufragio. Para ello se disponen, entre otras, las siguientes medidas:

- 1.- Que el Servicio Electoral incluya en el Registro Electoral a las personas privadas de libertad pero con derecho a sufragar.
- 2.- Que los tribunales comuniquen al Registro Electoral las personas privadas de libertad, pero cuyo derecho a sufragio no estuviere suspendido ni revocado.
- 3.- Que en los recintos de detención, a cargo de Gendarmería, no se pueda privar del derecho de sufragio ni entorpecerlo a quienes no lo tuvieron legalmente suspendido o no hubieren perdido la ciudadanía.

## IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

Es atendible la preocupación manifestada por los autores de la moción, toda vez que un ciudadano cuyos derechos políticos no estuvieren suspendidos, debería poder siempre sufragar, si así lo estimare, dado el carácter voluntario que ahora tiene el sufragio. Sin embargo, como se verá, los instrumentos empleados por el proyecto para lograr esa finalidad, esto es, que puedan sufragar no obstante estar privados de libertad, no son los adecuados.

Por esta razón será necesario comenzar por señalar, resumidamente, el marco normativo aplicable.

### MARCO

#### NORMATIVO

Desde el establecimiento del sufragio voluntario y la inscripción automática, se encuentran inscritos en el Registro Electoral todos los chilenos mayores de 18 años; incluso deben encontrarse inscritos quienes tuvieran su ciudadanía suspendida, puesto que podría revocarse la causa de su suspensión (como si fuera absuelto de la acusación en el respectivo juicio penal), o incluso los que la hubieran perdido por condena a pena aflictiva, pues deberían recuperar su ciudadanía una vez que hubieran cumplido la pena. Que no puedan sufragar no significa que deban ser borrados del Registro Electoral.

Las normas respectivas son, por una parte, el artículo 18, inciso segundo de la Constitución Política de la República (CPR) según el cual “una ley orgánica constitucional contemplará, además, un sistema de registro electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el solo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución”. Conforme a dicha norma la ley inscribe en el Registro Electoral a todos los chilenos que hubieran cumplido los 18 años, sin necesidad de requerir la inscripción.

Por otra parte, la CPR, al establecer la calidad de ciudadano, esto es el que puede elegir y ser elegido para cargos de elección popular, también establece causales de suspensión y de pérdida de esa calidad. En lo que concierne al primer caso, el artículo 16 de la CPR establece que “el derecho de sufragio se suspende por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”. Son penas aflictivas las señaladas en el artículo 37 del Código Penal y que, en síntesis, son las privativas de libertad iguales o superiores a 3 años y un día. Adicionalmente, se suspende la ciudadanía por condena efectuada por el Tribunal Constitucional cuando declarare inconstitucional a grupos o personas que propugnaren la violencia como método de acción política; esta suspensión se extingue automáticamente después de cinco años contados desde la sentencia.

Además, la CPR, en su artículo 17, regula la pérdida de la calidad de ciudadano, y que tiene

como causal la condena a pena aflictiva o por delito calificado de conducta terrorista. En el primer caso, la calidad de ciudadano se recupera automáticamente una vez extinguida la responsabilidad penal (por ejemplo, por haber cumplido la pena), y en el segundo, se recupera si el condenado fuere rehabilitado por el Senado; esta forma de rehabilitación también es aplicable a quienes fueren condenados a pena aflictiva por el delito de tráfico de estupefacientes. Debe tenerse presente, para cerrar el punto, que los que hubieren perdido la ciudadanía por haber perdido la nacionalidad chilena, no corresponde que continúen inscritos en el Registro Electoral.

## REGISTRO ELECTORAL Y PADRÓN ELECTORAL

El proyecto discurre sobre la base de que están excluidos del Registro Electoral los acusados y condenados a pena aflictiva, y adopta medidas para evitar esa situación.

Ello supone desconocer la existencia del Padrón Electoral, regulado en los artículos 30 y siguiente de la ley 18.566 orgánica constitucional sobre sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; pero ya desde el artículo 3° de la misma ley se señala que “el Registro Electoral servirá de base para conformar los Padrones Electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella, sea que se encuentren en Chile o en el extranjero”.

Como fluye del texto transcrito, la ley distingue, por un lado, la inscripción en el Registro Electoral, y por otro, el hecho específico de tener derecho a sufragar en una elección determinada, lo que supone figurar en el padrón electoral de la respectiva elección. Dicho más concretamente, el derecho a sufragio en cada elección o plebiscito depende del padrón y no del hecho de estar inscrito en el Registro, el que, en todo caso, es un antecedente necesario para confeccionar el padrón electoral de cada elección o plebiscito.

Por último y para despejar toda duda sobre un aspecto que es esencial para la comprensión y análisis del proyecto de ley en estudio, puede afirmarse que todo ciudadano que figure en el padrón electoral para una elección específica, ha de estar, necesariamente, inscrito en el Registro Electoral; pero, a la inversa, no todos los inscritos en el Registro aparecerán en el padrón ni van a concurrir a todas las elecciones y plebiscitos previstos en la constitución y las leyes; pues concurrirán solo quienes aparezcan en el padrón electoral, que se confecciona específicamente para cada elección o plebiscito. El Registro, en cambio, es de carácter permanente.

Así, quien estuviere acusado por delito que merezca pena aflictiva o condenado a una pena aflictiva, continuará inscrito en el Registro Electoral; pero no podrá concurrir sufragar durante el tiempo que estuviere acusado y condenado, por haber sido excluido del padrón electoral.

La situación que puede darse en la práctica y a la cual se refiere el proyecto, es que una persona puede estar privada de libertad y no tener su ciudadanía ni suspendida ni haberla perdido y, entonces por una circunstancia de hecho, no podrá votar.

## CASOS ESPECÍFICOS

La relación entre las normas sobre suspensión y pérdida de la ciudadanía y los casos a que se refiere el proyecto puede presentar varias hipótesis que parece necesario precisar y aclarar.

Primero conviene distinguir la causal básica de suspensión de la causal de pérdida. Se suspende a quien hubiere sido acusado por un delito que merezca pena aflictiva. Estas son todas las penas de crímenes, que se extienden desde los cinco años y un día hasta presidio perpetuo efectivo; respecto de las penas de simples delitos, importan las de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos que, como ya se ha dicho, comienzan en los tres años y un día hasta los cinco años.

Así, el acusado por un delito que merezca una de las penas recién anotadas, queda suspendido de sus derechos ciudadanos, situación que podría revocarse automáticamente si, en el respectivo juicio, es sobreseído o ha sido condenado en definitiva a una pena igual o inferior a los tres años. A la inversa, si la pena que le fuere impuesta resultare igual o superior a los tres años y un día, entonces continuará sin poder ejercer sus derechos ciudadanos, pero ahora por cuanto habría perdido la ciudadanía.

Pero además de la suspensión por la acusación por delito que merezca pena aflictiva, la CPR

prescribe la pérdida por condena a pena aflictiva, independientemente de que se hubiera o no previamente suspendido por la acusación (ya que pudo ser acusado por una pena no aflictiva), o de que hubiera sido acusado por un delito que no merecía pena aflictiva, pero que por circunstancias agravantes, hubiera en definitiva resultado condenada a tres años y un día o a una pena superior. Para la pérdida de la ciudadanía se mira la pena definitivamente impuesta y no la pena asignada al delito, aunque lo más probable es que, en cada sentencia, éstas resulten similares.

## SITUACIÓN PRÁCTICA

Los casos de impedimento para sufragar, que preocupa a los autores de la moción, son los siguientes:

- a.- Un elector acusado por un delito que no merece pena aflictiva, pero que se encuentra sometido a prisión preventiva por orden del juez de garantía. Este ciudadano tiene todo el derecho de concurrir a sufragar, pero deberá permanecer en su lugar de reclusión, pues no existe normativa que obligue a las autoridades a facilitar su comparecencia a la mesa donde debería sufragar.
- b.- Un elector condenado a una pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, pero respecto del cual no se hubiere decretado alguna forma de cumplimiento alternativo (por ejemplo, por tener condenas anteriores que impiden la remisión condicional). En este

caso no se le priva de la ciudadanía, pero en los hechos, no podrá concurrir a votar.

La situación de ambas personas privadas de libertad es similar, por motivos muy distintos, a la de una persona recluida por graves razones de salud en una clínica y respecto de la cual ni existe ni acusación ni condena. Tampoco podrá concurrir a sufragar.

Por lo anterior, es importante reconocer que tanto las personas acusadas por delito que merezca pena aflictiva, como las condenadas a pena aflictiva, continúan inscritas en el Registro Electoral pero no figurarán en el padrón electoral para una elección o plebiscito. A su vez, las personas privadas de libertad acusadas por delito que no merece pena aflictiva, o condenadas a una pena inferior a la aflictiva, sí que deberán encontrarse inscritas en el padrón electoral.

Siendo así, no existe una razón legal para que dichas personas no puedan concurrir a sufragar, pues ninguna norma se lo impide. Y si se quiere corregir esta situación, no corresponde legislar modificando las normas sobre inscripciones electorales ni sobre proceso penal, sino que se trata de una cuestión de carácter práctico, que si bien no está resuelta en la ley, no parece fácil tratar de resolverla por ley.

Debería, frente a esta iniciativa, obtenerse información estadística sobre el número de personas que se encontrarían en la situación que asume la moción, esto es, que están facultadas para votar y aparecerían en el respectivo padrón electoral, pero están privadas de libertad.

Siendo así, el problema de fondo consiste de determinar si existen los medios materiales para acompañar a estas personas a cumplir su derecho ciudadano en una elección, sin

correr el riesgo de que se produzca una fuga o quebrantamiento de condena. Ello sería materia propia de Gendarmería y de los recursos disponibles. En todo caso, se trataría de una decisión administrativa y no legislativa, puesto que, contrariamente a lo que supone la moción, en todos los casos analizados se trata de personas inscritas en el Registro Electoral, y conforme a las reglas generales, el Servicio Electoral tomará conocimiento de su situación para excluirlas del padrón electoral; o para incluirlas en él, pero la circunstancia de que no puedan votar no constituye un impedimento legal, como asumen los autores de la moción, sino de carácter exclusivamente práctico.

## UN CASO SIMILAR Y SU FINANCIAMIENTO

En una óptica más amplia, este caso es similar, por el desconocimiento del sistema normativo relativo al sufragio, a la repetida afirmación de que los chilenos en el extranjero no podían ejercer el derecho de sufragio. Esta afirmación no es correcta, pues el hecho de encontrarse en el extranjero ni suspende la ciudadanía ni hace que se pierda. Lo que sucedía era que resultaba oneroso trasladarse hasta Chile para votar; entonces la “solución” fue ponerles la urna en su lugar de residencia fuera de Chile.

Esta solución, sin embargo, requirió de una expresión legislativa por cuanto se requería dotar de atribuciones a diversas autoridades, especialmente a los cónsules de Chile en el

extranjero, y sobre todo, se requería establecer por ley el gasto fiscal necesario para distribuir el material electoral fuera del territorio nacional.

Pero en el caso del proyecto de ley que se comenta, no se percibe un gasto fiscal significativo, o que no pueda solventarse con los recursos normales de Gendarmería, como son el personal de custodia y el vehículo para el traslado.

Lo que sí es necesario establecer previamente, es el número de personas afectadas por no poder sufragar, teniendo la capacidad jurídica de hacerlo y estando comprendidas en el padrón electoral. Por ejemplo, encontrar personas condenadas a una pena inferior a la aflictiva y que, no obstante, deben permanecer detenidas por no haber podido ser beneficiados con alguna medida alternativa, debe tratarse de casos de muy escasa ocurrencia ■■■



# **TEXTO** **COMPARADO**

Para mejor visualizar el marco normativo de nivel legal relativo al proyecto de ley, se adjunta el respectivo comparado, sin perjuicio de las notas a pie de página que se agregan al texto del proyecto de ley.

<b>MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA LEY N° 18.556</b>	<b>TEXTO MODIFICADO (se destaca la modificación)</b>
<p>En EL artículo 3°, se agrega un inciso tercero nuevo, pasando el actual a ser cuarto y los demás, asumiendo el orden cardinal que corresponda, en los siguientes términos: “El Registro Electoral contendrá, además, a aquellas personas que se encuentren privadas de libertad, cuyo derecho a sufragar, sin embargo, no se hallare suspendido, de acuerdo a lo establecido la Constitución y las leyes”.</p>	<p><i>Artículo 3°.- Créase un Registro Electoral permanente bajo la dirección del Servicio Electoral, que contendrá la nómina de todos los chilenos comprendidos en los números 1° y 3° del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años.</i></p> <p><i>El Registro Electoral contendrá también la nómina de los demás chilenos y extranjeros mayores de 17 años, que cumplan con los requisitos para sufragar establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República.</i></p> <p><i><u>El Registro Electoral contendrá, además, a aquellas personas que se encuentren privadas de libertad, cuyo derecho a sufragar, sin embargo, no se hallare suspendido, de acuerdo a lo establecido la Constitución y las leyes.</u></i></p> <p><i>El Registro Electoral contendrá a todos los electores potenciales a que se refieren los incisos anteriores, sea que se encuentren en Chile o en el extranjero, aun cuando se encontraren con su derecho a sufragio suspendido, o hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa.</i></p> <p><i>El Registro Electoral servirá de base para conformar los Padrones Electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella, sea que se encuentren en Chile o en el extranjero.</i></p>

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA LEY N° 18.556	TEXTO MODIFICADO (se destaca la modificación)
<p>En el artículo 8º, se agrega un inciso tercero nuevo, pasando el actual a ser cuarto y final, en los siguientes términos: “El Registro Electoral deberá contener además, los datos necesarios de aquellas personas que se encuentren privadas de libertad que, sin embargo, no tuvieren su derecho a sufragio suspendido conforme a la Constitución y las leyes”.</p>	<p><i>Artículo 8º.- El Registro Electoral deberá contener los nombres y apellidos de los inscritos, e indicará para cada uno el número de rol único nacional, la fecha y el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, la profesión, el domicilio electoral, la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna, o del país y ciudad extranjera, según corresponda, a que pertenezca, el número de la mesa receptora de sufragios en que le corresponde votar y el cumplimiento del requisito de avecindamiento, si procede.</i></p> <p><i>El Registro Electoral también deberá contener los antecedentes necesarios para determinar si la persona inscrita ha perdido la ciudadanía, el derecho a sufragio o se encuentra éste suspendido.</i></p> <p><u><i>El Registro Electoral deberá contener además, los datos necesarios de aquellas personas que se encuentren privadas de libertad que, sin embargo, no tuvieren su derecho a sufragio suspendido conforme a la Constitución y las leyes.</i></u></p> <p><i>Se entenderá por datos electorales los señalados en este artículo y cualquier otro que sea necesario para mantener actualizado el Registro Electoral.</i></p>
<p>En el artículo 10º, se agrega un inciso final nuevo, en los siguientes términos: “En el caso de las personas que se encuentren privadas de libertad, cuyo derecho a sufragio no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes, el domicilio electoral corresponderá a la circunscripción en que se encuentre el establecimiento penitenciario en que se esté cumpliendo una medida cautelar personal o condena”.</p>	<p><i>Artículo 10.- El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él. En el caso de los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren en el extranjero, el domicilio electoral es aquel situado fuera de Chile, declarado como tal por el elector.</i></p> <p><i>No se podrá declarar como domicilio electoral la oficina o sede de un candidato o partido político, salvo que quienes lo declaren tengan una relación</i></p>

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA LEY N° 18.556	TEXTO MODIFICADO (se destaca la modificación)
	<p>de trabajador dependiente con dicho partido o candidato.</p> <p>Tratándose de una residencia temporal, el vínculo objetivo deberá corresponder a la condición de propiedad o arriendo superior a un año del bien raíz por parte del elector, o de su cónyuge, sus padres o sus hijos.</p> <p>Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.</p> <p>Para efectos del registro automático de las personas referidas en los artículos 5 y 6, el domicilio electoral será el último declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ante la jefatura nacional de extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile o ante los consulados de Chile, o el acreditado para el cumplimiento del requisito de avecindamiento, según corresponda.</p> <p><u>En el caso de las personas que se encuentren privadas de libertad, cuyo derecho a sufragio no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes, el domicilio electoral corresponderá a la circunscripción en que se encuentre el establecimiento penitenciario en que se esté cumpliendo una medida cautelar personal o condena.</u></p>
<p>En el artículo 13º, se agrega una letra g) nueva, en los siguientes términos: "g) El de hallarse la persona privado de libertad, cuyo derecho a sufragio, sin embargo, no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes",</p>	<p>Artículo 13.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el Registro Electoral considerando las siguientes circunstancias:</p> <p><u>g) El de hallarse la persona privado de libertad, cuyo derecho a sufragio, sin embargo, no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes".</u></p>

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA LEY N° 18.556	TEXTO MODIFICADO (se destaca la modificación)
<p>En el artículo 17, se agrega un inciso final nuevo en los siguientes términos: “Los Juzgados de Garantía y de Juicio Oral en lo Penal, según corresponda, deberán además comunicar al Servicio Electoral las personas que se hallaren privados de libertad, cuyo derecho a sufragio, sin embargo, no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes”,</p>	<p><i>Artículo 17.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que, en el mes anterior, hayan sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.</i></p> <p><i>En la misma oportunidad, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda, deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, aunque no se haya impuesto dicha pena, o por delitos que la ley califique como conducta terrorista, o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos.</i></p> <p><u><i>Los Juzgados de Garantía y de Juicio Oral en lo Penal, según corresponda, deberán además comunicar al Servicio Electoral las personas que se hallaren privados de libertad, cuyo derecho a sufragio, sin embargo, no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes.</i></u></p>
<p>En su artículo 50, para agregar un inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser cuarto y los demás a adoptar la numeración ordinal que corresponda, en los siguientes términos: “El Servicio Electoral y deberá garantizar que en todas las circunscripciones electorales las personas habilitadas para votar puedan ejercer su derecho a sufragio. En el caso de aquellas personas que se encontraren privadas de libertad, cuyo derecho a sufragio, sin embargo, no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes, el Servicio Electoral en conjunto con Gendarmería deberán especialmente, asegurar las condiciones para que estas personas puedan ejercer su derecho, cuando así lo decidieren”.</p>	<p><i>Artículo 50.- Las Circunscripciones Electorales son la unidad territorial electoral básica, formada por todo o parte del territorio comunal en el caso de las circunscripciones en el territorio nacional, o por todo o parte del territorio de un país o países, en el caso de circunscripciones en el extranjero. En cada circunscripción electoral se determinarán Mesas Receptoras de Sufragios que deberán funcionar en el territorio jurisdiccional de la circunscripción.</i></p> <p><i>El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá crear circunscripciones electorales cuando lo hagan aconsejable circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal o consular, las</i></p>

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA LEY N° 18.556	TEXTO MODIFICADO (se destaca la modificación)
	<p>distancias excesivas o la existencia de diversos centros poblados de importancia.</p> <p><u>El Servicio Electoral [y] deberá garantizar que en todas las circunscripciones electorales las personas habilitadas para votar puedan ejercer su derecho a sufragio. En el caso de aquellas personas que se encontraren privadas de libertad, cuyo derecho a sufragio, sin embargo, no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes, el Servicio Electoral en conjunto con Gendarmería deberán especialmente, asegurar las condiciones para que estas personas puedan ejercer su derecho, cuando así lo decidieren.</u></p> <p>La resolución determinará el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones y se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en el caso de circunscripciones en el territorio nacional, en un periódico de la localidad respectiva y, si allí no lo hubiere, en el correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias lo requieran, o en el caso de circunscripciones en el extranjero.</p> <p>El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá cancelar una circunscripción electoral cuando lo hagan aconsejable circunstancias tales como la cantidad de población o las dificultades para sufragar. En este caso, deberá asignar a los electores a la circunscripción más cercana incorporándolos a una mesa receptora de sufragios de conformidad al artículo 12 y efectuando la comunicación señalada en el artículo 7°, inciso primero, de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio Electoral no podrá cancelar una circunscripción en el extranjero, si ésta es la única existente en el respectivo país.</p>

MODIFICACIONES PROPUESTAS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL	TEXTO MODIFICADO (se destaca la modificación)
<p>En el artículo 122, se agrega un nuevo inciso final en los siguientes términos: “Con todo, la procedencia y aplicación de estas medidas cautelares no limitará los derechos que como ciudadanos le correspondan a quienes se vean afectados por ellas, en los casos que la Constitución y las leyes señalan”.</p>	<p><i>Artículo 122.- Finalidad y alcance. Las medidas cautelares personales sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsistiere la necesidad de su aplicación.</i></p> <p><i>Estas medidas serán siempre decretadas por medio de resolución judicial fundada.</i></p> <p><u><i>Con todo, la procedencia y aplicación de estas medidas cautelares no limitará los derechos que como ciudadanos le correspondan a quienes se vean afectados por ellas, en los casos que la Constitución y las leyes señalan.</i></u></p>
<p>Se agrega un artículo 137 bis, nuevo, en los siguientes términos:</p> <p>“Artículo 137 bis.- Difusión de derechos que otorga la ciudadanía. Los recintos de detención policial y casas de detención no podrán privar ni entorpecer el ejercicio de los derechos que otorga la calidad de ciudadanos, de acuerdo a la Constitución y las leyes, a las personas que se hallaren detenidas, cuando se hallaren habilitados para ejercerlos.”.</p>	
<p>En el artículo 150, se agrega un nuevo inciso final en los siguientes términos: “El imputado que se hallare en prisión preventiva durante la etapa de investigación, luego de la formalización de ésta y aún no fuere acusado, tras el cierre de la misma, no podrá ser privado de sus derechos que como ciudadano le correspondieren de acuerdo con la Constitución y las leyes”.</p>	<p><i>Artículo 150.- Ejecución de la medida de prisión preventiva. El tribunal será competente para supervisar la ejecución de la prisión preventiva que ordenare en las causas de que conociere. A él corresponderá conocer de las solicitudes y presentaciones realizadas con ocasión de la ejecución de la medida.</i></p> <p><i>La prisión preventiva se ejecutará en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizaren para los condenados o, al menos,</i></p>

MODIFICACIONES PROPUESTAS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL	TEXTO MODIFICADO (se destaca la modificación)
	<p>en lugares absolutamente separados de los destinados para estos últimos.</p> <p><i>El imputado será tratado en todo momento como inocente. La prisión preventiva se cumplirá de manera tal que no adquiera las características de una pena, ni provoque otras limitaciones que las necesarias para evitar la fuga y para garantizar la seguridad de los demás internos y de las personas que cumplieren funciones o por cualquier motivo se encontraren en el recinto.</i></p> <p><i>El tribunal deberá adoptar y disponer las medidas necesarias para la protección de la integridad física del imputado, en especial aquellas destinadas a la separación de los jóvenes y no reincidentes respecto de la población penitenciaria de mayor peligrosidad.</i></p> <p><i>El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.</i></p> <p><i>Cualquier restricción que la autoridad penitenciaria impusiere al imputado deberá ser inmediatamente comunicada al tribunal, con sus fundamentos. Éste podrá dejarla sin efecto si la considerare ilegal o abusiva, convocando, si lo estimare necesario, a una audiencia para su examen.</i></p> <p><u><i>El imputado que se hallare en prisión preventiva durante la etapa de investigación, luego de la formalización de ésta y aún no fuere acusado, tras el cierre de la misma, no podrá ser privado de sus derechos que como ciudadano le correspondieren de acuerdo con la Constitución y las leyes.</i></u> ■■■</p>

# VI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

**Artículo 1º:** Modifíquese la Ley nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, en los siguientes términos:

- a) En su artículo 3º, para agregar un inciso tercero nuevo, pasando el actual a ser cuarto y los demás, asumiendo el orden cardinal que corresponda, en los siguientes términos: "El Registro Electoral contendrá, además, a aquellas personas que se encuentren privadas de libertad, cuyo derecho a sufragar, sin embargo, no se hallare suspendido, de acuerdo a lo establecido la Constitución y las leyes."<sup>1</sup>.
- b) En su artículo 8º, para agregar un inciso tercero nuevo, pasando el actual a ser cuarto y final, en los siguientes términos: "El Registro Electoral deberá contener además, los datos necesarios de aquellas personas que se encuentren privadas de libertad que, sin embargo, no tuvieron su derecho a sufragio suspendido conforme a la Constitución y las leyes."<sup>2</sup>.
- c) En su artículo 10º, para agregar un inciso final nuevo, en los siguientes términos: "En el caso de las personas que se encuentren privadas de libertad, cuyo derecho a sufragio no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes, el domicilio electoral corresponderá a la circunscripción en que se encuentre el establecimiento penitenciario en que se esté cumpliendo una medida cautelar personal o condena."<sup>3</sup>.

1 El artículo 3º quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 3º.- Créase un Registro Electoral permanente bajo la dirección del Servicio Electoral, que contendrá la nómina de todos los chilenos comprendidos en los números 1º y 3º del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años.

El Registro Electoral contendrá también la nómina de los demás chilenos y extranjeros mayores de 17 años, que cumplan con los requisitos para sufragar establecidos en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de la República.

El Registro Electoral contendrá, además, a aquellas personas que se encuentren privadas de libertad, cuyo derecho a sufragar, sin embargo, no se hallare suspendido, de acuerdo a lo establecido la Constitución y las leyes.

El Registro Electoral contendrá a todos los electores potenciales a que se refieren los incisos anteriores, sea que se encuentren en Chile o en el extranjero, aun cuando se encontraren con su derecho a sufragio suspendido, o hubieren perdido la ciudadanía por cualquier causa.

El Registro Electoral servirá de base para conformar los Padrones Electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella, sea que se encuentren en Chile o en el extranjero.

2 El artículo 8º quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 8º.- El Registro Electoral deberá contener los nombres y apellidos de los inscritos, e indicará para cada uno el número de rol único nacional, la fecha y el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, la profesión, el domicilio electoral, la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna, o del país y ciudad extranjera, según corresponda, a que pertenezca, el número de la mesa receptora de sufragios en que le corresponde votar y el cumplimiento del requisito de avecindamiento, si procede.

El Registro Electoral también deberá contener los antecedentes necesarios para determinar si la persona inscrita ha perdido la ciudadanía, el derecho a sufragio o se encuentra éste suspendido.

El Registro Electoral deberá contener además, los datos necesarios de aquellas personas que se encuentren privadas de libertad que, sin embargo, no tuvieron su derecho a sufragio suspendido conforme a la Constitución y las leyes.

Se entenderá por datos electorales los señalados en este artículo y cualquier otro que sea necesario para mantener actualizado el Registro Electoral.

3 El artículo 10 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 10.- El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él. En el caso de los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren en el extranjero, el domicilio electoral es aquel situado fuera de Chile, declarado como tal por el elector.

No se podrá declarar como domicilio electoral la oficina o sede de un candidato o partido político, salvo que quienes lo declaren tengan una relación de trabajador dependiente con dicho partido o candidato.

Tratándose de una residencia temporal, el vínculo objetivo deberá corresponder a la condición de propiedad o arriendo superior a un año del bien raíz por parte del elector, o



- a) En su artículo 13<sup>o4</sup>, para agregar una letra g) nueva, en los siguientes términos: “g) El de hallarse la persona privado de libertad, cuyo derecho a sufragio, sin embargo, no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes.
- b) En su artículo 17, para agregar un inciso final nuevo en los siguientes términos: “Los Juzgados de Garantía y de Juicio Oral en lo Penal, según corresponda, deberán además comunicar al Servicio Electoral las personas que se hallaren privados de libertad, cuyo derecho a sufragio, sin embargo, no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes.”<sup>5</sup>.
- c) En su artículo 50, para agregar un inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser cuarto y los demás a adoptar la numeración ordinal que corresponda, en los siguientes términos: “El Servicio Electoral y deberá garantizar que en todas las circunscripciones electorales las personas habilitadas para votar puedan ejercer su derecho a sufragio. En el caso de aquellas personas que se encontraren privadas de libertad, cuyo derecho a sufragio, sin embargo, no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes, el Servicio Electoral en conjunto con Gendarmería deberán especialmente, asegurar las condiciones para que estas personas puedan ejercer su derecho, cuando así lo decidieren.”<sup>6</sup>.

de su cónyuge, sus padres o sus hijos.

Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral. Para efectos del registro automático de las personas referidas en los artículos 5 y 6, el domicilio electoral será el último declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ante la jefatura nacional de extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile o ante los consulados de Chile, o el acreditado para el cumplimiento del requisito de avecindamiento, según corresponda.

En el caso de las personas que se encuentren privadas de libertad, cuyo derecho a sufragio no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes, el domicilio electoral corresponderá a la circunscripción en que se encuentre el establecimiento penitenciario en que se esté cumpliendo una medida cautelar personal o condena.

4 Artículo 13, encabezamiento:

Artículo 13.- El Servicio Electoral deberá mantener actualizado el Registro Electoral considerando las siguientes circunstancias:

g) El de hallarse la persona privado de libertad, cuyo derecho a sufragio, sin embargo, no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes.

5 El artículo 17 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 17.- Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que, en el mes anterior, hayan sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.

En la misma oportunidad, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda, deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, aunque no se haya impuesto dicha pena, o por delitos que la ley califique como conducta terrorista, o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos.

Los Juzgados de Garantía y de Juicio Oral en lo Penal, según corresponda, deberán además comunicar al Servicio Electoral las personas que se hallaren privados de libertad, cuyo derecho a sufragio, sin embargo, no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes.

6 El artículo 50 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 50.- Las Circunscripciones Electorales son la unidad territorial electoral básica, formada por todo o parte del territorio comunal en el caso de las circunscripciones en el territorio nacional, o por todo o parte del territorio de un país o países, en el caso de circunscripciones en el extranjero. En cada circunscripción electoral se determinarán Mesas Receptoras de Sufragios que deberán funcionar en el territorio jurisdiccional de la circunscripción.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá crear circunscripciones electorales cuando lo hagan aconsejable circunstancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunicación con la sede comunal o consular, las distancias excesivas o la existencia de diversos centros poblados de importancia.

El Servicio Electoral [y] deberá garantizar que en todas las circunscripciones electorales las personas habilitadas para votar puedan ejercer su derecho a sufragio. En el caso de aquellas personas que se encontraren privadas de libertad, cuyo derecho a sufragio, sin embargo, no se hallare suspendido conforme a la Constitución y las leyes, el Servicio Electoral en conjunto con Gendarmería deberán especialmente, asegurar las condiciones para que estas personas puedan ejercer su derecho, cuando así lo decidieren.

La resolución determinará el territorio jurisdiccional de las nuevas circunscripciones y se publicará dentro de quinto día en el Diario Oficial y, además, en el caso de circunscripciones en el territorio nacional, en un periódico de la localidad respectiva y, si allí no lo hubiere, en el correspondiente de la capital provincial o regional. Sin perjuicio de lo anterior, podrán difundirse avisos por otros medios de comunicación social, cuando las circunstancias lo requieran, o en el caso de circunscripciones en el extranjero.

El Servicio Electoral, por resolución fundada, podrá cancelar una circunscripción electoral cuando lo hagan aconsejable circunstancias tales como la cantidad de población o las dificultades para sufragar. En este caso, deberá asignar a los electores a la circunscripción más cercana incorporándolos a una mesa receptora de sufragios de conformidad al artículo 12 y efectuando la comunicación señalada en el artículo 7°, inciso primero, de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio Electoral no podrá cancelar una circunscripción en el extranjero, si ésta es la única existente en el respectivo país.

**Artículo 2º:** Modifíquese el Código Procesal Penal, en su título V del Libro Segundo, denominado “Medidas Cautelares Personales”, en los siguientes términos:

- a) En su artículo 122, para agregar un nuevo inciso final en los siguientes términos: “Con todo, la procedencia y aplicación de estas medidas cautelares no limitará los derechos que como ciudadanos le correspondan a quienes se vean afectados por ellas, en los casos que la Constitución y las leyes señalan.”<sup>7</sup>.
- b) Para agregar un artículo 137 bis, nuevo, en los siguientes términos: “Difusión de derechos que otorga la ciudadanía. Los recintos de detención policial y casas de detención no podrán privar ni entorpecer el ejercicio de los derechos que otorga la calidad de ciudadanos, de acuerdo a la Constitución y las leyes, a las personas que se hallaren detenidas, cuando se hallaren habilitados para ejercerlos.
- c) En su artículo 150, para agregar un nuevo inciso final en los siguientes términos: “El imputado que se hallare en prisión preventiva durante la etapa de investigación, luego de la formalización de ésta y aún no fuere acusado, tras el cierre de la misma, no podrá ser privado de sus derechos que como ciudadano le correspondieren de acuerdo con la Constitución y las leyes.”<sup>8</sup>.



7 El artículo 122 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 122.- Finalidad y alcance. Las medidas cautelares personales sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsistiere la necesidad de su aplicación.

Estas medidas serán siempre decretadas por medio de resolución judicial fundada.

Con todo, la procedencia y aplicación de estas medidas cautelares no limitará los derechos que como ciudadanos le correspondan a quienes se vean afectados por ellas, en los casos que la Constitución y las leyes señalan.

8 El artículo 150 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 150.- Ejecución de la medida de prisión preventiva. El tribunal será competente para supervisar la ejecución de la prisión preventiva que ordenare en las causas de que conociere. A él corresponderá conocer de las solicitudes y presentaciones realizadas con ocasión de la ejecución de la medida.

La prisión preventiva se ejecutará en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizaran para los condenados o, al menos, en lugares absolutamente separados de los destinados para estos últimos.

El imputado será tratado en todo momento como inocente. La prisión preventiva se cumplirá de manera tal que no adquiera las características de una pena, ni provoque otras limitaciones que las necesarias para evitar la fuga y para garantizar la seguridad de los demás internos y de las personas que cumplieren funciones o por cualquier motivo se encontraren en el recinto.

El tribunal deberá adoptar y disponer las medidas necesarias para la protección de la integridad física del imputado, en especial aquellas destinadas a la separación de los jóvenes y no reincidentes respecto de la población penitenciaria de mayor peligrosidad.

El tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.

Cualquier restricción que la autoridad penitenciaria impusiere al imputado deberá ser inmediatamente comunicada al tribunal, con sus fundamentos. Éste podrá dejarla sin efecto si la considerare ilegal o abusiva, convocando, si lo estimare necesario, a una audiencia para su examen.

El imputado que se hallare en prisión preventiva durante la etapa de investigación, luego de la formalización de ésta y aún no fuere acusado, tras el cierre de la misma, no podrá ser privado de sus derechos que como ciudadano le correspondieren de acuerdo con la Constitución y las leyes.